



Consideraciones del expresidente de la República, César Gaviria Trujillo sobre las preocupaciones generadas por los últimos acontecimientos en la agenda legislativa y la Presidencia de la República.

El Partido Liberal de Colombia desea manifestar su preocupación ante los graves acontecimientos que han tenido lugar en las últimas semanas, relacionados con los pronunciamientos, decisiones y acciones del presidente Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa, el exsenador y exembajador de Venezuela Armando Benedetti, y la exjefa de gabinete Laura Sarabia. Hemos también observado las declaraciones y el accionar de otros funcionarios políticos y policiales que han estado involucrados en actividades presuntamente delictivas, las cuales deben ser analizadas con el mayor rigor. Ya se han iniciado varios procesos judiciales por parte de la fiscalía general de la nación, cuyos procederes consideramos apropiados y no sesgados en contra de los partidos que conforman el gobierno.

En este contexto, consideramos fundamental proteger las instituciones democráticas y buscar soluciones que estén en consonancia con la ley y la Constitución. No podemos permitir el retorno de expresiones beligerantes e insensatas en la política, especialmente cuando se utilizan argumentos populistas que van en disonancia con nuestra Constitución, que estamos obligados a defender y proteger, mucho menos las reacciones a las críticas en medios de comunicación, esenciales a la protección de la libertad de expresión como parte de los derechos fundamentales. Es imperativo mantener un marco de respeto a las instituciones democráticas y trabajar en conjunto para encontrar soluciones que promuevan el bienestar de todos los ciudadanos, basadas en el Estado de Derecho y el respeto a los principios democráticos y en el apoyo a los mas vulnerables. Hay que promover políticas para que los jóvenes vean su futuro en Colombia y que los mas vulnerables indígenas, afrodescendientes, ancianos reciban la mayor protección del estado.

Las preocupaciones que surgen como resultado de la avalancha de noticias inquietantes hacen que sea necesario garantizar el funcionamiento y la ejecución efectiva de nuestras instituciones en el marco del Estado de Derecho y la seguridad pública. Estos son pilares fundamentales para mantener una continuidad estable en

nuestro país. Es crucial que dichas instituciones actúen de acuerdo con sus funciones constitucionales y legales.

Nos preocupa el lenguaje beligerante contra nosotros los liberales frente a hechos que han surgido dentro de su gobierno. Estamos preparados para concretar acuerdos y sentar bases para el diálogo en el que participen diversos sectores de la sociedad, no para regaños ni respuestas agresivas, ni amenazas sobre hechos a los que somos totalmente ajenos.

Si bien es importante investigar y ejercer la fiscalización, también es necesario que lo hagan de manera responsable y considerando las consecuencias legales y constitucionales. Debemos tener en cuenta la larga tradición de estabilidad de las instituciones en Colombia, las cuales han sido clave para nuestro crecimiento en las últimas tres décadas. Por lo tanto, es esencial preservar y fortalecer estas instituciones, asegurando que cumplan con su papel de manera adecuada.

El Partido Liberal ha operado dentro de los límites establecidos por el presidente Gustavo Petro, quien ha designado a personas cercanas a los partidos y que han sido afines a su campaña. Se ha formado una coalición compuesta por ciudadanos que votaron por él, una coalición de sus amigos políticos. Todos los miembros de su gabinete votaron por el candidato Petro y el Ministro del Interior propone ahora poner de un lado la Constitución y borrar lo que ella dice sobre como se toman las decisiones de los partidos en bancada, después de que los proyectos se discuten en las comisiones constitucionales y las plenarias. Y hacen el transito legal correspondiente.

Es pertinente reconocer que muchos de los artículos de las reformas que se están discutiendo actualmente se han analizado por muchas horas, con la colaboración de los parlamentarios y técnicos de primer nivel de los partidos. La discusión del proyecto de salud se ha hecho de manera exhaustiva como pocas veces hemos visto en el debate parlamentario.

Queremos dejar claro que actuaremos con la mayor libertad e independencia posible, siempre tomando decisiones pensando en el bienestar de Colombia y en la democracia, cumpliéndose los principios establecidos en la Constitución de 1991.

Nos preocupa que puedan surgir elementos que pongan en duda la transparencia y legalidad de los recursos de la campaña del presidente Petro, incluso si los presuntos implicados rectifican su relación con las diferentes actividades delictivas. Esto nos lleva a exigir a las autoridades que investiguen exhaustivamente los hechos mencionados, sin comprometer las instituciones democráticas.

El Partido Liberal se compromete con la verdad y el correcto funcionamiento de estas instituciones, pero no estamos dispuestos a poner en riesgo el gobierno elegido democráticamente. En varias ocasiones, el presidente Petro me ha excluido tanto en el ámbito político como personal, ante mi supuesto incumplimiento en compromisos políticos pasados, transmitiendo este mensaje que carece de fundamento, a varios líderes parlamentarios de diferentes partidos. Lo que sucede es que el piensa que todo el conjunto de normas expedidas después de la ley 100, que abrieron muchas opciones para la participación del sector privado como complemento de las acciones públicas, son la causa de nuestros males sin que para ello proporcione mayor evidencia, de lo cual fui informado por el señor presidente en Florencia.

Debo expresar que en el momento en que se tomaba la decisión sobre su candidatura, estuve en estrecha comunicación con aquellos que consideraban seriamente los argumentos presentados por la Colombia Humana. Algunos de estos eran cercanos a nuestros ideales, intereses y luchas, esto es la protección de los más vulnerables, a pesar de ser conscientes de los riesgos que una propuesta alternativa representaba para el país por las posiciones radicales de la coalición gobernante.

De la última reunión de gobernadores aplazada, surge una preocupación urgente: la política de "paz total" está generando graves riesgos para la seguridad personal y pública en amplias zonas de nuestro país. Esta preocupación se intensifica debido a la confusión que existe al tratar de distinguir entre aquellos individuos que reciben un trato preferencial para ciertos grupos al margen de la ley, quienes son liberados y exonerados de acciones penales, sin cumplir las reglas de sometimiento aprobadas por el Congreso y aquellos que lideran actividades delictivas según las autoridades.

Además, se ha observado cómo la Fuerza Pública ha sido sometida a vejámenes y se ha dado prioridad a un trato benevolente a diferentes actores criminales, por medio de reuniones con líderes de grupos delictivos en diversas cárceles, tal como lo han mencionado algunos gobernadores durante la reciente y fallida cumbre de gobernadores.

Hemos recibido informes de varios líderes políticos que indican que en algunas áreas de sus respectivos departamentos están surgiendo grupos que buscan impedir el ejercicio del voto o que exigirán pagos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Queremos dejar en claro que la Constitución fue establecida con el propósito de proteger a los ciudadanos y sus derechos, no a los delincuentes

armados, salvo procedimientos aprobados por el Congreso. Es fundamental garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto sin ningún tipo de interferencia o coacción. La política de paz total debe asegurar el respeto de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y no deja de tener riesgos que una sola persona haya sido revestida de funciones legales de policía y judiciales. Es una nueva política de paz cuya eficacia esta bajo examen de todos en los órganos legislativos, judiciales y de policía.

Ante las repetidas solicitudes del Gobierno para que la CIDH intervenga, recordamos que su mandato está diseñado para actuar en relación con los agentes estatales y no sobre particulares. El presidente Petro debe tener en cuenta que la función de la CIDH es supervisar a los funcionarios de su gobierno y no a imponer acciones sobre particulares o partidos políticos.

Asimismo, si el presidente planea promover marchas para presionar al Congreso, queremos resaltar los riesgos involucrados en dicha acción. El Comisionado de Derechos Humanos no se encuentra en Colombia para impulsar el programa de la Colombia Humana o el Pacto Histórico, es importante que esto no sea olvidado y lo digo por el equívoco que pudo surgir de su presencia en la reunión convocada por el presidente Petro para apoyar su agenda legislativa.

Estoy convencido de que, en esta difícil situación, el Gobierno debería abrir espacios de diálogo con las diferentes fuerzas sociales y políticas para abordar los aspectos problemáticos de las reformas que actualmente se encuentran en trámite en el Congreso.

El Partido Liberal cree que es posible realizar reformas en áreas como la salud, las pensiones, el mercado laboral, la agricultura y la educación, pero sin destruir las instituciones que han servido bien al país y sin profundizar en la polarización. Por el contrario, como hemos enfatizado, se debe construir sobre los logros alcanzados y tener en cuenta lo que ya se ha logrado. Y teniendo en consideración los puntos de vista de otros partidos, la extrema radicalidad no puede ser el punto de referencia de los temas como ha ocurrido hasta el momento con las iniciativas legales o constitucionales que nos proponemos modificar.

Presidente, estamos preparados para respaldar y defender su legitimidad, especialmente en momentos como los que estamos enfrentando. Nunca seríamos participes de un enfoque que promueva la polarización, ya que entendemos que esto solo conduciría a un aumento de la violencia y a un debilitamiento de nuestra democracia. En este sentido, enfatizamos en que somos sus aliados y no un obstáculo. Estamos comprometidos en trabajar juntos para buscar soluciones que

promuevan la paz, la estabilidad y el bienestar de todos los ciudadanos, y condenamos sin reticencias los llamados golpes blandos.

César Gaviria Trujillo
Director del Partido Liberal Colombiano